

REPÚBLICA DE COLOMBIA



SALA DE DECISIÓN LABORAL

El veintidós (22) de junio de dos mil veintitrés (2023), la SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL del TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, procede a proferir sentencia de segunda instancia, en el presente proceso ordinario laboral promovido por el señor **JULIO ALBERTO RINCÓN RAMÍREZ** contra la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES** (en adelante COLPENSIONES) y la sociedad **ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A.** (en adelante PROTECCIÓN S.A.), tramitado bajo el radicado No. **05001-31-05-003-2021-00475-01**.

AUTO

De conformidad con el memorial de sustitución de poder, allegado vía correo electrónico junto con los alegatos de conclusión de segunda instancia por parte de la sociedad MUÑOZ Y ESCRUCERÍA S.A.S. quien representa judicialmente los intereses de COLPENSIONES en este proceso, se procede a reconocer personería a la abogada LUISA FERNANDA SÁNCHEZ NIETO portadora de la T.P. 329.278 del C. S. de la Judicatura, para que represente a COLPENSIONES en este proceso como apoderada sustituta.

El Magistrado del conocimiento, Dr. FRANCISCO ARANGO TORRES, declaró abierto el acto y previa deliberación sobre el asunto, la Sala adoptó el proyecto presentado por el ponente, el cual quedó concebido en los siguientes términos:

1. ANTECEDENTES:

El demandante pretende con la presente acción judicial, que se declare la ineficacia de su traslado al régimen pensional de ahorro individual con solidaridad (en adelante RAIS), ordenando su retorno al régimen pensional de prima media con prestación definida (en adelante RPM) administrado por Colpensiones.

Como fundamento fáctico de sus pretensiones relata el actor que estuvo afiliado en el RPM administrado por el ISS desde el mes de abril de 1988, y en el mes de julio de 1995 se trasladó al RAIS por medio de la AFP PROTECCIÓN S.A.

Arguye que antes de cumplir los 10 años para tener derecho a su pensión de vejez no recibió por parte de PROTECCIÓN S.A. la doble asesoría, y que no recibió la información necesaria para su traslado, pues no recibió un buen consejo para optar cuál régimen de pensiones le era más conveniente a sus intereses pensionales.

Expone que mediante respuesta a derecho de petición elevado ante COLPENSIONES el 1° de septiembre de 2021, le informaron que la solicitud de traslado no era procedente; igualmente, elevó ante PROTECCIÓN S.A. solicitud de traslado el 31 de agosto de 2021, sin recibir respuesta por parte de dicha entidad.

Manifiesta que PROTECCIÓN S.A. no le brindó información clara, oportuna y veraz de las ventajas y desventajas de permanecer en un fondo privado, tampoco le hicieron una comparación o simulación pensional.

2. DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA:

El *a quo* despachó favorablemente las pretensiones de la demanda, pero declarando la ineficacia por inaplicación constitucional del acto jurídico a través del cual el demandante se trasladó del RPM al RAIS, declarando que la AFP PROTECCIÓN S.A. faltó a su obligación de dar información clara, veraz, oportuna y suficiente al demandante y que dicha falta de información le causó un daño grave al demandante en su acceso real y efectivo a la seguridad social, siendo entonces la AFP PROTECCIÓN S.A. la responsable del daño causado al demandante, por lo que el demandante se encuentra en el RPM pero a cargo de la AFP PROTECCIÓN S.A.

Seguidamente el juez, declaró que el demandante tiene derecho a la pensión de vejez con base en la Ley 100 de 1993 modificada por la Ley 797 de 2003 a cargo de PROTECCIÓN S.A. a la que ordenó reconocer, liquidar y pagar la pensión de vejez bajo las condiciones del RPM, dentro del mes siguiente a la fecha en que el actor lo solicite por escrito, adjuntando el certificado de retiro laboral. Determinó además el juez, que, dentro del mes siguiente al reconocimiento y pago de la pensión, PROTECCIÓN S.A. deberá solicitar a COLPENSIONES la elaboración del cálculo actuarial pensional con miras a la subrogación pensional, el cual deberá liquidar COLPENSIONES e informar su valor a PROTECCIÓN S.A. dentro de los dos meses

siguientes a la solicitud, debiendo ser cancelado dicho cálculo por PROTECCIÓN S.A., y a partir del momento en que se pague dicho cálculo actuarial COLPENSIONES asumirá el pago de la prestación.

Así mismo ordenó a PROTECCIÓN S.A. que hasta tanto no pague real y efectivamente el valor del cálculo actuarial pensional a COLPENSIONES, continúa obligada a pagar la pensión de vejez bajo el RPM al demandante, e igualmente COLPENSIONES subrogará en la pensión a PROTECCIÓN S.A. desde el momento y hora que dicha entidad pague real y efectivamente el valor cálculo actuarial.

Autorizó a PROTECCIÓN S.A. a enjugar parte del valor del cálculo actuarial pensional ordenado pagar a COLPENSIONES, tomando para si los ahorros pensionales del demandante, rendimientos financieros, bono pensional y cualquiera otra suma de dinero adicional.

Declaró que COLPENSIONES es un tercero en el acto jurídico de traslado del RPM al RAIS y en consecuencia absolvió a dicha entidad de todas las pretensiones incoadas por la parte demandante, sin perjuicio de las órdenes que se le dieron.

Finalmente declaró no prosperadas las excepciones propuestas por las demandadas y condenó en costas a la AFP PROTECCIÓN S.A. a favor del demandante.

Para fulminar la condena el *a quo* argumentó que la ineficacia de los actos jurídicos en Colombia debe ser declarada cuando una autoridad observa que ha sido violentado un derecho social fundamental. Que cuando la ineficacia de un acto jurídico o la nulidad de ella es declarada por traer efectos adversos a una de las partes, se entra a una institución propia del derecho denominada el principio de relatividad de los actos jurídicos que benefician o perjudican a los que han participado en él, no a los terceros.

Arguye que COLPENSIONES es un tercero absoluto frente al acto jurídico de traslado, porque ni la constitución, ni la ley le obliga a estar atento a ese acto jurídico y, por lo tanto, las consecuencias negativas de la ineficacia del traslado no tienen por qué recaer en esta entidad y obligarle a reconocer una pensión pues habría un detrimento patrimonial al Estado.

Luego adujo que, las actividades que realizan las administradoras de fondos de pensiones con carácter mercantil financiera, realizan una actividad fiduciaria y que está definido por la jurisprudencia de décadas atrás que en ese contrato no hay una obligación de resultado, pero si ha exigido la ley y la jurisprudencia una obligación de

medio que es la de cabal diligencia y asesoría a la persona que realiza el contrato de fiducia. La doctrina lo denomina como la obligación de diligencia debida o de buen consejo y por lo tanto, cuando las administradoras de fondos de pensiones no dan información clara, veraz y oportuna al momento del traslado y a lo largo del proceso, conforme al artículo 10 del Decreto 720 de 1994 son responsables directamente por los perjuicios, por los daños, por el menoscabo al acceso a la seguridad social en pensiones que traiga el beneficiario, mas no a trasladar los dineros de la cuenta de ahorro individual sino a emitir un título pensional, y si la persona ya ha cumplido la edad obligar a la AFP a pagar la pensión como si fuera del RPM, mediante un cálculo actuarial pensional.

Finalmente concluyó el juez, que no encuentra prueba alguna de que los fondos privados demandados hubieren entregado al actor una información clara, veraz y oportuna al momento del traslado, y si bien en el proceso se encuentran formularios de afiliación, estos son preformatos que contienen una leyenda interior que no demuestran que se ha hecho el traslado de manera libre y voluntaria, por lo que declaró la ineficacia de la afiliación pero indicó que la consecuencia de esta ineficacia no es la afiliación al RPM porque ya está prohibida al faltarle al demandante menos de 10 años para pensionarse, por lo tanto la pensión de vejez estará a cargo del fondo privado.

3. DE LOS RECURSOS DE APELACIÓN:

La sentencia fue apelada por los apoderados de PROTECCIÓN S.A., de COLPENSIONES y del DEMANDANTE.

APELACIÓN DE PROTECCIÓN S.A.

La apoderada de PROTECCIÓN S.A. apela la sentencia de primera instancia en su totalidad, argumentando que la condena no se ajusta al precedente jurisprudencial frente a la materia convocada, violando así el principio de seguridad jurídica, pues de conformidad con el precedente jurisprudencial de la CSJ Sala Laboral, la consecuencia de la ineficacia del traslado de régimen es que las cosas deben volver a la situación en la que se encontraban antes del traslado, y ello implica que el demandante se conserve válidamente afiliado al RPM y que PROTECCIÓN S.A. deba proceder con la devolución de la totalidad de los aportes que hubiere recibido durante la vigencia de la afiliación al RAIS, por ende condenar a PROTECCIÓN S.A. al reconocimiento de la pensión de vejez del demandante bajo los parámetros del RPM y posterior subrogación

de la misma por parte de COLPENSIONES, no es un efecto propio de la ineficacia, vulnerándose así lo que ha establecido la CSJ en su precedente.

Alega que durante el proceso no fue pretendido que PROTECCIÓN S.A. pagara la pensión de vejez del demandante a título de responsabilidad profesional o perjuicios, por lo que con la decisión del *a quo* se está alterando el principio de congruencia y su decisión carece de sustento normativo, puesto que las condenas impuestas no tienen previsión legal, por lo que no se le pueden imponer a PROTECCIÓN S.A.

Expone que imponer dichas cargas a PROTECCIÓN S.A. resulta excesivo, ilegal e inconstitucional, ilegal porque desconocería la naturaleza del RAIS, inconstitucional porque las normas del RAIS fueron declaradas exequibles mediante Sentencia C 086 de 2002, por otro lado, se violaría el principio de la sostenibilidad financiera establecido en el artículo 48 de la Constitución Política, pues en el RPM la pensión de vejez se liquida de manera diferente al RAIS, además los requisitos de uno u otro no se pueden equiparar, ya que el tal caso la condena sería excesiva y traería como consecuencia necesaria que PROTECCIÓN S.A. asuma de su propio patrimonio dichas mesadas pensionales, lo que la conllevaría a su insolvencia, pues el patrimonio de PROTECCIÓN S.A. es diferente al de los fondos que administran, por lo mismo es que las pensiones en el RAIS se financian con los ahorros creados en la cuenta de ahorro individual de los afiliados, más los rendimientos y el bono pensional si a ello hubiere lugar.

Manifiesta que frente a las facultades extra y ultrapetita algo es importante mencionar que si bien es cierto el artículo 50 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social otorga al juez dichas facultades, estas no le permiten al juez decidir caprichosamente, sino con base en hechos probados y debatidos en el proceso, por lo que la indemnización de perjuicios ordenada por el *a quo*, no fue una situación presentada con los hechos y pretensiones de la demanda, por lo que no se le dio la oportunidad a PROTECCIÓN S.A. de debatirlos y descorrer traslado, por lo que considera que el juez primera instancia está excediendo las facultades otorgadas, al pretender una condena o reconocer y pagar al demandante la pensión de vejez, bajo las reglas del RPM trasladando incluso a COLPENSIONES las sumas de dinero del cálculo actuarial pensional, que permita financiar el pago de la pensión de vejez bajo este régimen.

Indica que frente al precedente de la Corte Suprema de Justicia sobre los perjuicios, es muy clara la postura de la Sala frente a esta figura, debiendo señalarse que el

precedente ha establecido sobre este particular, que dichos perjuicios se establecen únicamente cuando el demandante se encuentra pensionado en el RAIS, más no frente al que tiene el estatus de afiliado en el Sistema General de Pensiones, por consiguiente no existe ningún fundamento que faculte o legitime la condena impuesta por el *a quo* en contra de su representada, razón por la cual solicita al Tribunal Superior de Medellín que se tenga en cuenta que la interpretación que el juez hace sobre el particular, es respecto de una acción de reparación de perjuicios que se encontraría afectada por el fenómeno de la prescripción extintiva, ya que dichos perjuicios se encontrarían prescritos al haber transcurrido más de 3 años desde la celebración del acto jurídico de la afiliación al RAIS, esto el 29 de julio de 1995 y la fecha presentación de esta demanda, pues es importante incluso tener en cuenta, que si la conducta culposa que está constituida por la omisión del deber de información en la etapa precontractual al momento mismo de la afiliación al RAIS, es desde esa fecha entonces que se debe contar el término de prescripción, ya que es de dicha data que se generó el presunto daño.

Expone que con el precedente de la Corte Suprema de Justicia, las AFP tienen invertida la carga de la prueba en lo referente a probar el deber de información, pero no existe ningún precedente que indique que también está invertida en la carga de la prueba en lo concerniente al tema de la aprobación de los perjuicios, por lo tanto si el despacho considera que debía invertirse la carga de la prueba frente a esta pretensión debió hacerlo señalando así dentro de la etapa procesal respectiva, para garantizar el derecho constitucional de defensa de PROTECCIÓN S.A., sin embargo ello tampoco fue realizado por el juzgado, en consecuencia le correspondía entonces a la parte demandante demostrar la existencia de un perjuicio o los elementos propios de la responsabilidad civil, debiendo incluso demostrar la existencia de un daño real y no uno hipotético, como lo hace el juez de instancia, por lo que sin demostrar estos elementos queda completamente desvirtuada la responsabilidad civil o la imputación de un perjuicio en contra de PROTECCIÓN S.A.

Finalmente señala que la condena impuesta por el *a quo*, más que proteger al demandante reconociéndole el derecho a una indemnización de perjuicios, va dirigida al reconocimiento de los perjuicios en favor de COLPENSIONES, entidad frente a la cual, el *a quo* no podía ejercer sus facultades extra y ultrapetita, ya que dicha entidad actúa en el presente proceso en calidad codemandada y no como demandante, por consiguiente cualquier indemnización de perjuicios en favor suyo no podrá ser discutida a través del presente proceso, por el contrario, la entidad debe acudir ante

la jurisdicción que en el evento de considerar que existe un derecho a reclamar perjuicios, no es la jurisdicción laboral.

APELACIÓN DE COLPENSIONES.

El apoderado de COLPENSIONES apela la sentencia parcialmente, en lo referente a los numerales 4, 7 y 8, estos dos últimos referentes a la suma del cálculo actuarial con miras a la subrogación pensional, argumentando en primer lugar, que se debe analizar qué es lo referente a la inaplicabilidad constitucional, en este caso se debe mirar qué derecho fundamental se está vulnerando, como su palabra lo dice inaplicar algo que está amparado bajo la Constitución, en el caso de la ineficacia del traslado en donde se manifiesta que las normas de menor categoría cuando resulten violentando los derechos sociales obligan a los jueces a la aplicación de estos principios legales, eso sí con las determinaciones establecidas en la ley, por lo que en los procesos de ineficacia del traslado no se está vulnerando ningún derecho, por cuanto la AFP en ningún momento está desconociendo el derecho al acceso real al sistema de la Seguridad Social en pensiones al demandante, por el contrario lo que está inmerso son unas prestaciones dinerarias porque según el apoderado la pensión en el RPM será más alta que en RAIS, situación está que demuestra que no se le está violentando ningún derecho en especial al de pensionarse.

Expone que el juez debía acogerse a la legislación y la Ley que es clara en cuanto a la prohibición de trasladarse de régimen cuando faltare menos de 10 años para su reconocimiento pensional, por cuando en el RPM se toma como IBL los últimos 10 años de cotización, por lo que esto genera inseguridad jurídica toda vez que los Sistemas de Pensiones existentes están bajo la premisa normativa, pero son excluyentes entre sí, al tener características diferentes.

Arguye que en lo referente a la nulidad o ineficacia del traslado jurídico propio del derecho privado, se deben dejar las cosas como estaban anteriormente y la inaplicación de un derecho público para salvaguardar los derechos de las personas a futuro, no obstante eso se da cuando hay una vulneración a los derechos fundamentales directos por conexidad, pero en el proceso no se está vulnerando ningún derecho, pues lo que se pretende es un mayor ingreso pensional, lo que no se está negando es su derecho a la pensión de vejez, pues en ningún evento la Corte Constitucional manifiesta que las pensiones que sean inferiores a los ingresos durante toda su vida laboral, sean inferiores a lo manifestado o a lo requerido por las partes interesadas en la presente litis, esto no es un derecho fundamental, dado que el

derecho fundamental es todo aquello que está amparado bajo la Carta Política, así las cosas los recursos públicos se deben cuidar y salvaguardar, por lo cual esos traslados bajos los argumentos financieros sostenidos por el juez de primera instancia, no serán sostenibles a futuro al trasladarse de régimen el demandante, razón por la cual si el dinero no alcanza para pagar la pensión, el Estado garantizará esa prestación sin importar las consecuencias que esto genere, siendo las consecuencias tan graves, dado que por cada pensionado deben existir 7 afiliados aportando, pero sucede lo contrario por cada 7 pensionados solo hay un aportante, por eso no hay una norma financiera, ni costumbre mercantil, que al no haber un soporte financiero se puede responder por una obligación en un tiempo futuro y como ocurre en estos casos con estos eventos de traslado se agota el dinero y le toca a los ciudadanos como Estado Colombiano solventar esas pensiones.

Indica que el pronunciamiento de la CSJ en sentencia SL 363 de 2021 deja la puerta abierta indicando que son los fondos los cuales deben de responder por los daños y perjuicios causados y no el Estado Colombiano, pues los fondos sí pueden pagar dado que en la mayoría de su aporte financiero está soportado en una entidad financiera que genera rentabilidades altas, las cuales no alcanza el Estado, quien es el encargado de garantizar los derechos a los ciudadanos, así las cosas y mirando el bloque de constitucionalidad se requiere aquellas normas y principios que aparecen formalmente en el articulado del texto constitucional son utilizadas como parámetros de control de constitucionalidad de las leyes, por lo tanto el control de constitucionalidad referente a no poderse trasladar de régimen cuando faltaren 10 o menos años, ya fue agotado.

Manifiesta que en cuanto a los numerales que versan sobre el principio de la responsabilidad referente a los ítem 7 y 8, van encaminados a que el afiliado tiene como responsabilidad asesorarse y conocer las reglamentaciones legales en las cuales está emergiendo su decisión, así las cosas el principio constitucional que el desconocimiento de la Ley no sirve de excusa, para alegar una condición desfavorable como en el presente caso, desconociendo su deber de información, pues debía de investigar y asesorarse como lo señala el Decreto 720 de 1994, en el cual se indica que el deber de información no exonera al afiliado del deber de ir ante los fondos averiguar de su situación pensional.

Continuó exponiendo que en cuantos a las permutas financieras a las que hace mención el juez, en el lenguaje financiero se conocen dichas permutas como un SUAF, que es un derivado financiero de un contrato entre dos partes, por el cual se están

pactando un intercambio de una serie de dinero y una fecha futura, pero el intercambio es un flujo monetario entre las partes, es decir, que no se sabe cuánto es el valor a pagar, y están sujetos a evolución de los tipos de intereses, divisas, etc., además indica que los SUAF son utilizados en incumplimientos crediticios, puesto que no se tiene un valor exacto o un parámetro de cual va ser el contenido de esos contratos, el alcance y las tasas de interés a que se refiere el Decreto 161 de 2014.

Indica que la Sentencia T 4042 de 2006 la Corte Constitucional, manifestó que se trata de una subrogación, en la que el empleador como deudor de la pensión de jubilación es reemplazado en su obligación de pagar las mesadas por el extinto ISS hoy COLPENSIONES, pero solo de los valores reconocidos por concepto de vejez con arreglo a la Ley, por lo que se estaría hablando de una compatibilidad porque entre el empleador y la administradora comparten el pago de la pensión del trabajador.

Manifiesta que a COLPENSIONES le está prohibido realizar subrogaciones pensionales, en los casos en que no se tiene claro cómo va ser el tratamiento especial para cada una de las pensiones, como en el caso de las ineficacias.

Arguye que a COLPENSIONES no le está prohibido realizar subrogaciones pensionales, pero estas deben ir sujetas a la Ley, pues lo que habla el juez de primera instancia referente al cálculo actuarial es únicamente cuando exista una omisión en la afiliación y esta omisión deber ser documentada como prueba aportada en el plenario por parte del empleador omisivo, es decir para que haya una omisión en la afiliación, el empleador omiso debe remitir información con pruebas de cuales fueron los periodos laborados, y un informe los salarios devengados durante todos los periodos omitidos, para después COLPENSIONES poder realizar el cálculo actuarial junto con los intereses de mora, pero en la ineficacia surge una pregunta ¿Cómo se debe realizar dicho cálculo si no se tiene la certeza del tiempo que se debe tener en cuenta? Por lo que es acá donde resulta ineficaz dicho cálculo actuarial, razón por la cual, al hacer esta privación por parte del juez de primera instancia, falta el real estudio de financiación y más y para este caso en concreto, donde cree que con los aportes ahorrados van a solventar una pensión, pues esto no alcanzaría para pagar ni siquiera 8 años de la misma.

Finalmente solicita se revoque lo referente a los numerales 4, 7 y 8 de la sentencia de primera instancia, puesto que sería perjudicial para COLPENSIONES recibir al demandante al RPM por cuanto los dineros ahorrados, no alcanzarían a solventar la pensión.

APELACIÓN DEL DEMANDANTE.

La apoderada del demandante apela la decisión de primera instancia, solicitando que se revoque en su totalidad, y en su lugar, se accedan a las pretensiones que fueron la declaración de la ineficacia de afiliación del fondo de pensiones PROTECCIÓN S.A. y que el afiliado pueda regresar al RPMPD, condenando a PROTECCIÓN S.A. a efectuar la devolución de todas las cotizaciones indexadas junto con los rendimientos financieros, bonos pensionales y cualquier otra suma recibida sean aportes obligatorios o voluntarios realizados por el afiliado a lo largo de su vida laboral, más los aportes para pensiones que la entidad recaudó, junto con todos los frutos e intereses a favor de COLPENSIONES con el fin que el trabajador cuando así lo vea pertinente, pueda tramitar su pensión de vejez en el RPM que es el régimen más favorable a sus intereses.

Expone que se debe dar plena aplicación a la línea jurisprudencial definida por la Corte Suprema de Justicia, en el sentido de indicar que se declare ineficacia en atención a las Sentencias 31989 del 9 de septiembre del 2008, 31314 del 9 de septiembre de 2008, 19447 del 2017 , SL 4974 de 2018 y S 4989 de 2018, entre otras, línea jurisprudencial que define cuáles son las consecuencias jurídicas de declarar la ineficacia de afiliación en los fondos privados, que no es más que otra que volver las cosas a su estado anterior, en este caso el afiliado debe de regresar al RPM teniendo en cuenta que esta fue su primigenia afiliación y tal como quedó demostrado en el proceso esté antes de que efectuará su traslado al RAIS estuvo afiliado al ISS hoy COLPENSIONES, pues fue en el RPM donde cotizó 319 semanas desde el año 1988 hasta julio de 1995.

Indica que las condiciones pensionales entre uno y otro régimen son muy distintas y así lo indicó la Corte Constitucional en sentencia C 401 de 2001, en la cual señaló las características esenciales que definen cada uno de los dos regímenes de seguridad existentes en materia de pensiones, de un lado está el RPM donde los afiliados o sus beneficiarios deben pagar cotizaciones periódicas a un fondo común para obtener una pensión de vejez, invalidez o muerte o una indemnización, los aportes que efectúan los afiliados al RPM y sus rendimientos, constituyen un fondo de naturaleza común que garantiza el pago de las prestaciones a quienes tengan la calidad de pensionados, hay que recordar que las personas afiliadas al RPM obtendrían el derecho a la pensión de vejez previamente a los requisitos cumplidos, esto es la edad y las semanas de cotización; Por su parte el RAIS está constituido por un conjunto de entidades, las

cuales administran recursos de carácter privado y público destinados al pago de las pensiones y prestaciones, en este régimen los aportes no ingresan a un fondo común sino que son depositados en una cuenta de ahorro individual que hace parte de cada afiliado, para poder tener derecho a una pensión, en este régimen no es por semanas, sino por el capital que cada afiliado tenga acumulado en su cuenta de ahorro individual.

Arguye que comparte el análisis jurídico que el juez realiza, en cuanto a determinar el derecho a una indemnización pero en este caso se está solicitando no una indemnización sino la ineficacia de la afiliación, ello teniendo en cuenta que aún el afiliado no tiene un derecho consolidado, es decir, el señor Julio Alberto Rincón no se encuentra pensionado por PROTECCIÓN S.A., por lo tanto es viable solicitar la ineficacia de la filiación en este fondo privado, además expone que en este caso no es procedente solicitar un pago de cálculo actuarial a la entidad COLPENSIONES, ya que esa no es la naturaleza jurídica del cálculo actuarial, máxime teniendo en cuenta que el señor Julio Alberto Rincón se le han realizado todos sus aportes en calidad de trabajador dependiente y lo que se está discutiendo aquí es la legalidad de la afiliación en PROTECCIÓN S.A. por no haber suministrado esta entidad la información necesaria oportuna y veraz donde el afiliado debía decidir antes de cumplir los 10 años para tener derecho a su pensión de vejez, cuál régimen de pensiones le convenía más.

Manifiesta que quedó demostrado dentro del expediente que PROTECCIÓN S.A. no le dio al asegurado una información veraz, oportuna y eficaz antes de que éste llegara a menos de 10 años para tener derecho a una pensión de vejez, donde se le informará cuáles eran las ventajas y desventajas de estar en dicho fondo, y más que apenas en el año 2021 PROTECCIÓN S.A. el 5 de octubre de 2021 realiza un análisis de la prestación económica de su afiliado, indicando que en el RPM tendría una mesa pensional superior a la que recibiría con PROTECCIÓN S.A. la cual si mucho llegaría a \$2.000.000, máxime la condición del afiliado quien es una persona profesional y que en la actualidad aporta sobre 13 SMLMV, obviamente la pensión que recibiría en el RAIS, administrado por PROTECCIÓN S.A. no alcanzaría a suplir sus necesidades básicas tal como lo advirtió el señor juez en su sentencia, y por ello era obligación legal para con su afiliado de que PROTECCIÓN S.A. suministrará toda la información veraz y oportuna en la cual antes de que el señor Julio Alberto pudiera cumplir los 10 años para tener derecho a su pensión, pues pudiera analizar esta situación y así haberse trasladado al régimen de pensiones que más le conviene, que en este caso es el RPM.

Señala que la Corte Suprema de Justicia ha realizado el correspondiente análisis a partir de las pautas y criterios fijados en la sentencia SL 1688 el año 2019, en la cual redefinió el alcance de la responsabilidad que tienen todas las administradoras del RPM y del RAIS para garantizar la libre escogencia de los afiliados, la Sala de Casación Laboral de la CSJ abordó el tema redefiniendo la naturaleza de sanción jurídica cuando se afecta la libertad de escogencia del afiliado frente a uno de los dos regímenes, y en este sentido expresó la reacción del ordenamiento jurídico artículo 271 y 272 de la Ley 100 de 1993 a la afiliación desinformada, es la ineficacia o la destrucción de todo efecto jurídico del acto de traslado, pues esa es la única sanción jurídica que actualmente se le está aplicando a los fondos de pensiones, por no dar a los afiliados una información veraz y oportuna, y no se le está aplicando otro tipo de sanciones diferentes, como la que quiere aplicar el juez en este proceso.

Por lo anterior, el examen del acto de cambio de régimen pensional por transgresión del deber de información debe abordarse desde la institución de la ineficacia, en el sentido estricto y no desde el sentido de régimen de nulidades sustanciales salvo en lo relativo en las consecuencias prácticas dejando a salvo la suma de dinero recibidas por el trabajador afiliado de buena fe, por lo expuesto resulta equivocado en análisis de esos asuntos bajo el prisma de las nulidades sustanciales, particularmente al exigirle al afiliado demostrar la existencia de vicios del consentimiento como sería el error, la fuerza o el dolo, pues el legislador expresamente consagró de qué forma el acto afiliación se ve afectado como no ha sido consentido de manera informada, en el presente caso el afiliado Julio Alberto de continuar afiliado en PROTECCIÓN S.A. y recibir por parte de este una pensión de vejez, sufriría un perjuicio económico irremediable teniendo en cuenta que conforme a la simulación pensional realizada, su pensión en el RAIS sería muy por debajo la que recibiría en el RPM, por consiguiente era obligación legal de la entidad administradora de pensiones brindarle toda la información necesaria y oportuna, el deber de asesoría y buen consejo para con su afiliado.

4. DE LOS ALEGATOS EN ESTA INSTANCIA:

Corrido el traslado para alegar en esta instancia, únicamente la apoderada de COLPENSIONES allegó escrito de alegatos, en los que señaló resumidamente que las entidades de Seguridad Social no solo se sujetan a la responsabilidad propia de los contratos de aseguramiento, sino que se ciñen a obligaciones de índole constitucional que trascienden como administradoras de un servicio público de seguridad social. En este caso, la responsabilidad de las AFP frente a las nulidades

y/o ineficacia de un traslado, no sólo se deben enmarcar a reparar el daño individualmente sometido a consideración de un Juez, sino que debe tener alcance frente a los daños indirectos que irradian o comprometen los derechos constitucionales de terceros, en razón de la reserva patrimonial de los pensionados y afiliados del Régimen de Prima Media que se ven comprometidos con el desmedro que sufre la reserva pensional, y que si bien es cierto, la jurisprudencia ha indicado que al afiliado no le es atribuible y por ende no se le exige la equivalencia económica de los aportes que se devuelven del RAIS al RPM, no es menos cierto, que tal reparo económico lo debe asumir quien ha causado el daño y por virtud de la operación de la inoponibilidad.

Una ineficacia repercute, en que se crea de manera injustificada y desproporcionada obligación con efectos patrimoniales en cabeza de **Colpensiones**, quien administra los aportes de miles de pensionados y afiliados, y dicha medida para restablecer los derechos del afiliado, no pasaría el segundo criterio de la “necesidad”, toda vez que si existen otros medios menos lesivos para mantener los derechos del afiliado, y es que quien se deba hacer cargo de las prestaciones económicas que se deriven de la ineficacia sea la AFP, quien ha administrado dichos recursos y ha generado los respectivos rendimientos, así mismo, al ponderar los bienes jurídicos en tensión, se podría demostrar que poner en cabeza de Colpensiones dicha responsabilidad, tiene un impacto más lesivo para la sostenibilidad financiera del sistema, evaluando diferentes variables, tales como: (i) que Colpensiones es la única administradora del RPM, que alberga un mayor número de pensionados cuyas pensiones se reconocen con subsidio de las arcas del Estado, de forma tal, que se estaría solventado con estos recursos, el desmedro económico ocasionado por particulares (AFP).

Las sentencias C-1024 de 2004, y SU-062 de 2010, de la Corte Constitucional en materia de traslados, indican que nadie puede resultar subsidiado a costa de los recursos ahorrados de manera obligatoria por los otros afiliados a este esquema, dado que el régimen solidario de prima media con prestación definida se descapitalizaría.

Dentro de la aludida jurisprudencia la Corte recordó que “el derecho a la libre elección entre los distintos regímenes pensionales previstos en la ley, no constituye un derecho absoluto, por el contrario, admite el señalamiento de algunas excepciones que, por su misma esencia, pueden conducir al establecimiento de una diversidad de trato” Como se observa, la Corte Constitucional destacó que el derecho a trasladarse **NO es absoluto** y debe atender criterios de sostenibilidad financiera y expectativas pensionales. En el desarrollo de los fines esenciales del Estado Colombiano, las instituciones que lo conforman deben propender hacia la salvaguarda de los principios

y valores constitucionales conforme a lo dispuesto en la Carta Política, la Ley y los Convenios Internacionales suscritos por aquel.

El artículo 334 de la Constitución Política, señala que “La sostenibilidad fiscal debe orientar a las Ramas y Órganos del Poder Público, dentro de sus competencias, en un marco de colaboración armónica”, en ese orden de ideas, es necesario que, dando prevalencia al interés general sobre el particular, se tomen las medidas pertinentes en búsqueda de la protección de los recursos que soportan el sistema pensional, conforme a los principios que rigen la Constitución Política, en la medida que el derecho a la seguridad social se encuentra atado al principio de sostenibilidad fiscal y estabilidad financiera del Estado.

Por estas razones solicito respetuosamente se **REVOQUE y/o MODIFIQUE** el fallo por la primera instancia en caso de dar aplicación a la línea jurisprudencial y declarar la ineficacia y o nulidad, al respecto de la obligación de aceptar la vinculación del demandante al régimen de prima media, a de indicarse que la ineficacia o nulidad del traslado por falta del deber de información que tienen las AFP, se están cargado consecuencias finales a la administradora de recursos públicos, respecto de un acto de terceros en el cual no intervino ni tuvo la capacidad de resistir.

Así la condena de recibir al afiliado en el RPM, sin solución de continuidad, ordenando recibir los valores trasladados de la RAIS y a reconocer una prestación económica, es una condena que vulnera el sistema de libre competencia entre los dos regímenes, implementado por la Ley 100 de 1993 y un peso tal que permite desconocer la obligación constitucional de proteger y garantizar la sostenibilidad financiera del sistema general de pensiones y en especial del régimen de prima media; defraudando los intereses de las personas que legítimamente lo han conformado con sus aportes.

Por lo que sin perjuicio de lo antes indicado solicito se condene al Fondo; a entregar a Colpensiones el total de los valores cotizados y/o depositados en la cuenta de ahorro individual de la demandante, tales como cotizaciones, bonos pensionales, títulos pensionales, rendimientos específicos completos que generaron los recursos en la RAIS, intereses, cuotas de administración, aportes de garantía de pensión mínima, aportes destinados al pago de la prima de reaseguros de Fogafín, los seguros de invalidez y sobrevivencia y cualquier otro concepto a consideración del despacho. Es decir, no solo el saldo del CAI sino todos los recursos con los respectivos rendimientos generados con la afiliación a la RAIS, indexados de conformidad con la sentencia SL 782 de 2021 y SL 3202, SL 3709, SL3710, SL 3769 de 2021.

5. PROBLEMA JURÍDICO PARA RESOLVER:

El problema jurídico para resolver se circunscribe a establecer si la afiliación del demandante al régimen pensional de ahorro Individual con solidaridad debe declararse ineficaz y en caso afirmativo, en qué términos y condiciones, se debe realizar, el traslado a COLPENSIONES del importe de las cotizaciones efectuadas en el RAIS por el demandante.

Tramitado el proceso en legal forma y por ser competente esta Corporación Judicial para conocer de la APELACIÓN y de la CONSULTA de la sentencia, conforme a lo dispuesto en los artículos 10 y 14 de la Ley 1149 de 2007, se pasa a resolver, previas las siguientes,

6. CONSIDERACIONES:

De conformidad con lo dispuesto el art. 14 de la Ley 1149 de 2007 además de resolverse la apelación de la parte demandante, PROTECCIÓN S.A., y COLPENSIONES, se consultará la sentencia en favor de esta última por haberle resultado adversa, por lo que, la legalidad del fallo será estudiada en su integridad.

Primeramente, es necesario manifestar que el traslado o afiliación a los distintos regímenes pensionales la establece el artículo 13 de la Ley 100 de 1993, disponiéndose además en los Arts. 60 y 114 de esta Ley, como en los arts. 10, 12 y 15 del Decreto 720 de 1994 vigente para la época del traslado del demandante, que el traslado de régimen pensional debe partir de la cabal y completa asesoría que lleve a un asegurado a tomar una decisión responsable e informada, asesoría que ha de entenderse pedagógica, es decir, realmente entendible para cada persona conforme a su grado de cultura y su situación particular, pues los casos no presentan las mismas características o condiciones.

La jurisprudencia de la SCL de la Corte Suprema de Justicia, a partir de la sentencia SL12136-2014 del 03 de septiembre de 2014, abandonando el concepto de **nulidad** del traslado, precisó que la omisión en la debida asesoría de las AFP al momento del referido traslado lo convierte en **ineficaz**, por violentar la exigencia del literal b) del artículo 13 de Ley 100 de 1993, sobre la obligatoriedad de que tal manifestación de traslado fuera libre y voluntaria y contempló, que de no ser así, la afiliación respectiva quedaría sin efecto y podría realizarse nuevamente en forma libre y espontánea por parte del trabajador.

Tal posición, que constituye a la fecha la línea jurisprudencial de la SCL de la Corte Suprema de Justicia sobre dicho tema, ha sido ratificada de manera reiterada en todos

los pronunciamientos emanados de dicha corporación, como en las sentencias SL1688-2019 y SL1689-2019, ambas proferidas el 8 de mayo de 2019, en las que, además la Corte fijó unas conclusiones jurisprudenciales en torno al tema de la ineficacia o nulidad de traslado de régimen, las que se resumen de la siguiente manera:

1. Las AFP, desde su creación, tenían el deber de brindar información a los afiliados o usuarios del sistema pensional a fin de que estos pudiesen adoptar una decisión consciente y realmente libre sobre su futuro pensional. primeramente, con un deber de información necesaria (en vigencia del decreto 663 de 1993), luego de asesoría y buen consejo (en vigencia de la Ley 1328 de 2009 y el decreto 2241 de 2010), y finalmente de doble asesoría (en vigencia de la Ley 1748 de 2014 y el decreto 2071 de 2015)
2. La simple constancia del consentimiento informado vertido en el formulario de afiliación, es insuficiente para dar por demostrado el deber de información. A lo sumo, acredita un consentimiento, pero no que haya sido informado.
3. La carga de la prueba de demostrar que el afiliado recibió la información debida, veraz y suficiente cuando se afilió, le corresponde a la AFP.
4. El precedente de la CSJ en torno a la ineficacia del traslado no aplica sólo a los casos en que el afiliado se cambia de régimen pensional a pesar de tener consolidado un derecho pensional, o contar con una expectativa pensional o derecho a la transición del art. 36 de la ley 100 de 1993, sino en todos los casos de incumplimiento del deber de información.

En el presente asunto, está probado, que el accionante, estando afiliado al RPM administrado por el extinto ISS hoy COLPENSIONES, según se advierte de la historia laboral emitida por la entidad como se observa a folio 22 y 23 (Documento 12 del expediente digital), se afilió a la administradora del RAIS COLMENA hoy PROTECCIÓN S.A. el 29 de julio de 1995, con efectividad al 1° de agosto de este mismo año, como se acredita con certificado del SIAFP que milita a folio 58 del expediente (Documento 15 del expediente digital).

De otra parte, si bien el demandante no es beneficiario del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, pues no contaba para el 1° de abril de 1994 con 40 o más años de edad o 15 años de servicio, ello no es óbice para que la AFP COLMENA hoy PROTECCIÓN S.A. en el año 1995 estuviera en la obligación de suministrarle la información clara, completa y oportuna respecto de las ventajas y desventajas de cada

régimen pensional; sobre todo **cómo alcanzaría la pensión de vejez y de qué dependería su monto en el RAIS.**

Sobre el deber de información antes citado, en el interrogatorio de parte que fue absuelto por el demandante, el cual se encuentra grabado a partir del minuto 00:29:40 del video de la audiencia de conciliación, trámite y juzgamiento, no se advierte que, este haya confesado que al momento de su traslado de régimen se le ilustró sobre aspectos neurálgicos de los regímenes pensionales, como lo son las características de uno y otro régimen pensional, los requisitos para acceder a las prestaciones económicas en cada uno de ellos, la forma de liquidación de la mesada pensional en cada régimen, la oportunidad de trasladarse entre regímenes y entre administradoras y los términos para ello, entre otros aspectos que resultan necesarios para considerarse que se otorgó una información completa, comprensible y suficiente.

Ahora, para probar dicha asesoría, como bien lo manifestó el *a quo* en sus consideraciones, no basta la firma del formulario con la inscripción preimpresa sobre que el traslado fue voluntario, sino que se requiere que se prueba que en realidad esa voluntad obedeció al suministro de una debida asesoría, para acreditar que el traslado se realizó con pleno conocimiento informado, lo cual como ya se ha dicho en esta sentencia, no se probó por parte PROTECCIÓN S.A. siendo su carga como ya lo ha estableció la jurisprudencia especializada.

En ilación con lo anterior, es evidente que, como lo concluyó el fallador de primera instancia, la demandada PROTECCIÓN S.A. no le brindó al demandante o por lo menos no probó, haberle otorgado, la debida asesoría para tomar la decisión de trasladarse de régimen pensional en el año 1995 que se produjo el citado traslado, por lo que, en sede de instancia se declarará la ineficacia del traslado de régimen pensional realizado por el demandante en el año 1995 cuando se trasladó del RPM administrado por el extinto ISS a la AFP COLMENA hoy PROTECCIÓN S.A., pero no como consecuencia de la inaplicación constitucional del acto jurídico de traslado, sino debido a que dicho acto nunca nació a la vida jurídica dado que adolece del consentimiento debidamente informado que debía tener el demandante al momento de suscribirlo conforme lo establece el literal b) del artículo 113 de la Ley 100 de 1993.

Ahora, frente a la orden dada a PROTECCIÓN S.A., de reconocer y pagar la pensión de vejez al demandante de conformidad con las normas que regulan la pensión en el RPM y además de pagar a COLPENSIONES el cálculo actuarial para subrogarse en dicha entidad, debe señalar la Sala que al declararse la ineficacia del traslado,

contrario a lo argumentado y concluido por el *a quo*, la consecuencia jurídica no puede ser la subrogación del riesgo de PROTECCIÓN S.A. en COLPENSIONES a través de un cálculo actuarial, sino que el acto de vinculación al régimen de ahorro individual no produjo ningún efecto, lo que conlleva a la reactivación de la afiliación del demandante en el RPM, con la consecuente devolución a COLPENSIONES, actual administrador de este régimen, por parte de PROTECCIÓN S.A. de todos los valores existentes en la cuenta de ahorro individual del demandante, es decir las cotizaciones allí depositadas con sus rendimientos o intereses, así como los gastos o cuotas de administración incluido el porcentaje de los seguros previsionales, reaseguro de Fogafín, y fondo de garantía de pensión mínima, es decir el 100% del valor de las cotizaciones, sin descuento de ninguna índole, pues al declararse la ineficacia del acto de traslado, **ningún efecto jurídico puede derivarse de este** y por tanto, deben reintegrarse a COLPENSIONES, la totalidad de las sumas que hubiese recibido la AFP demandada como cotización del demandante, como lo ha señalado de manera reiterada la SCL de la CSJ en sentencias CSJ SL4964-2018, CSJ SL4989-2018 y CSJ SL1421-2019, ya que será Colpensiones la entidad que reconocerá el derecho prestacional, en caso de que se consolide en cabeza del accionante.

Al respecto ha explicado la Corte Suprema de Justicia, que las consecuencias prácticas de la ineficacia son idénticas a las de la nulidad, señalando la Sala Civil de la alta Corporación que: *«cualquiera sea la forma en que se haya declarado la ineficacia jurídica (entendida en su acepción general), bien porque falte uno de sus requisitos estructurales, o porque adolezca de defectos o vicios que lo invalidan, o porque una disposición legal específica prevea una circunstancia que lo vuelva ineficaz, la consecuencia jurídica siempre es la misma: declarar que el negocio jurídico no se ha celebrado jamás»* (CSJ SC3201-2018).

En este orden de ideas, como lo dispone el art. 1746 del C.C., norma que regula las restituciones mutuas en el régimen de nulidades: *“La nulidad pronunciada en sentencia que tiene la fuerza de cosa juzgada, da a las partes derecho para ser restituidas al mismo estado en que se hallarían si no hubiese existido el acto o contrato nulo”*.

En este sentido se pronunció igualmente la SCL de la CSJ, sentencia 31989 de 8 de septiembre de 2008 y lo reiteró en sentencias SL4964-2018, SL4989-2018, SL1421-2019 y SL1688-2019.

Al tratarse de la declaratoria de un acto ineficaz que acarrea los mismos efectos de uno nulo, no es dable concebir, so pretexto del principio de la buena fe o de una buena

gestión en la administración del bien, que dichas sumas queden por fuera de las restituciones, de un lado, porque se trata de rubros que pertenecen al régimen de prima media con prestación definida, y por ello son necesarios para su funcionamiento, y por otro, porque es la indebida actuación por parte de las AFP demandadas, al no proveer la información clara, completa y comprensible a través de sus asesores, que tiene como consecuencia, además del hecho de generar la declaratoria de ineficacia, que deban asumir de su patrimonio los perjuicios que se ocasionen a los afiliados y las sumas sufragadas a terceros, como lo son las aseguradoras previsionales, ello con base en los artículos 2.2.7.4.1 y 2.2.7.4.3 del Decreto Único Reglamentario 1833 de 2016, que compiló los artículos 10 y 12 del Decreto 720 de 1994.

Conforme lo expuesto en precedencia, si bien no le asiste razón a los apelantes, que alegan la improcedencia de la declaratoria de la ineficacia del traslado de régimen pensional del actora, sí les acompaña la razón en lo concerniente que los efectos jurídicos de la declaratoria de ineficacia, no podrían ser los establecidos por el *a quo*, encontrándose que, en la sentencia de primera instancia se ordenó pagar en el RAIS una pensión bajo las reglas del RPM lo que no había sido petitionado en la demanda, pues la consecuencia de la ineficacia del traslado del actor al RAIS, debe ser que regresa al RPM administrado por COLPENSIONES al que se encontraba afiliado antes de su traslado al RAIS.

Así las cosas, tiene razón al apoderado de PROTECCIÓN S.A. en cuanto argumenta en su apelación que no se le podía imponer por condena una indemnización de perjuicios en lo referente al monto de la pensión de vejez que podría percibir el actor en el RAIS, comparado con el RPM.

Ahora, respecto de la solicitud que se ordene la devolución de aportes debidamente indexada, tal solicitud no es procedente por cuanto estos rubros ninguna depreciación sufrieron por haber generado sus intereses y tampoco se ha alegado ni probado que este concepto sea inferior al valor total del aporte legal correspondiente, más los rendimientos que se hubieran generado en caso de que el demandante hubiera permanecido en el régimen de prima media.

En cuanto a la indexación de las cuotas de administración, asunto apelado por la apoderada del demandante, la jurisprudencia de la CSJ de la que se citan las sentencias SL1688 de 2019 SL 2932 de 2020, SL 3202, 3571, 3706, 3707, 3708, 3709 y 3769 de 2021, la CSJ ha ordenó que las cuotas de administración fueran devueltas indexadas, le asiste razón a la apoderada del demandante en este aspecto, de la

apelación, por lo que se ordenará en esta instancia, que las referidas cuotas de administración sean devueltas indexadas.

Respecto de la afirmación que realiza el apoderado de COLPENSIONES en su recurso de alzada sobre la imposibilidad legal de traslado de régimen, derivada de la restricción temporal impuesta por el legislador en el artículo 2 de la ley 797 de 2003 el cual modifico el literal e) del artículo 13 de la ley 100 de 1993, cuando le falten al afiliado menos de 10 años para adquirir el derecho a la pensión de vejez, es palmario que tal prohibición, se aplica en los casos de traslado voluntario, que no es lo que pretende el demandante, sino la ineficacia de su afiliación inicial al RAIS.

De otra parte, se afirma en la apelación de COLPENSIONES, que la declaración de ineficacia del traslado del demandante al RAIS y la reactivación la afiliación al RPM, atenta contra el principio de sostenibilidad financiera del sistema pensional colombiano establecida en el artículo 48 de la Constitución Política, adicionado por el artículo 1 del Acto Legislativo 01 de 2005, por la inexistencia de equivalencia entre los valores recibidos y los valores requeridos para el posterior reconocimiento y pago de la pensión de vejez del demandante.

Frente al anterior argumento, se ha de manifestar, que para efecto de declarar la ineficacia del traslado del demandante al RAIS, no es jurídicamente viable tener en cuenta el principio antes citado, pues, desde que el actor estuvo afiliado al RPM era beneficiario de las prerrogativas de este régimen pensional, conforme lo disponía la legislación, y por ello no es posible desconocer los derechos que tiene conforme las norma legales vigentes, so pretexto de someterse al principio de la sostenibilidad financiera del sistema pensional colombiano, pues a este principio el que se tiene que someter es el legislador al realizar las reformas pensionales, no que el juez para desconocer derechos ya legislados.

También le asiste razón a COLPENSIONES en su apelación, en cuanto no se le podía imponer la carga de realizar cálculo actuarial, pues la decisión no podía ser otra que declarar la ineficacia del traslado de régimen pensional, y que, en consecuencia, el actor regresaba al RPM al que se encontraba afiliado antes del traslado, con la consecuente devolución a COLPENSIONES de las cotizaciones en la forma ya explicada.

En cuanto a la excepción de PRESCRIPCIÓN formulada por las demandadas; se tiene que, bajo la óptica jurisprudencial de la ineficacia del traslado de régimen introducido por la SCL de la Corte Suprema de Justicia, al concluirse que el acto jurídico de

traslado de régimen nunca nació a la vida jurídica, no es procedente aplicar la prescripción, conforme puntualmente lo ha señalado la SCL de la CSJ en la sentencia SL1689-2019.

Conforme a las razones fácticas, probatorias y de derecho expuestas en precedencia, la sentencia apelada y consultada será CONFIRMADA, REVOCADA, MODIFICADA y ADICIONADA en los términos anteriormente expuestos.

Sin costas en esta instancia por haber prosperado para cada uno de los apelantes parcialmente el recurso interpuesto. Las costas de primera instancia corren a cargo de PROTECCIÓN S.A., las que serán fijadas por el *a quo*.

7. DECISIÓN:

En mérito de lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 10 de octubre de 2022, proferida por el JUZGADO TERCERO LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN, en el proceso ordinario laboral promovido por la señora el señor **JULIO ALBERTO RINCÓN RAMÍREZ** contra **COLPENSIONES** y **PROTECCIÓN S.A.**, en cuanto declaró la ineficacia del traslado de régimen pensional del actor y condenó en costas a PROTECCIÓN S.A., pero por las razones expuestas en esta instancia, y se REVOCA en todo lo demás para en su lugar:

- **CONDENAR** a PROTECCIÓN S.A., a devolver a COLPENSIONES todos los valores existentes en la cuenta de ahorro individual del demandante, es decir las cotizaciones allí depositadas con sus rendimientos o intereses; así como indexados, los gastos o cuotas de administración, incluido el porcentaje de los seguros previsionales, seguro Fogafín, y fondo de garantía de pensión mínima, es decir el 100% del valor de las cotizaciones, sin descuento de ninguna índole.
- **ORDENAR** a COLPENSIONES, a reactivar la afiliación del demandante JULIO ALBERTO RINCÓN RAMÍREZ al régimen de prima media con prestación definida, sin solución de continuidad y además a recibir la devolución de los

dineros ordenados en este proveído, e incluir las cotizaciones realizadas por el actor al RAIS, en su historia laboral de COLPENSIONES.

- **DECLARAR** no probadas las excepciones propuestas por las demandadas.

SEGUNDO: Las costas de primera instancia corren a favor del demandante y a cargo de PROTECCIÓN S.A., las que serán fijadas por el *a quo*.

SIN COSTAS en esta instancia.

La anterior sentencia se notifica a las partes en EDICTO.

Oportunamente devuélvase el expediente al Juzgado de origen.

No siendo otro el objeto de esta diligencia se declara culminada, y se firma por quienes en ella han intervenido, los magistrados,

Firmado Por:

Francisco Arango Torres
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Jaime Alberto Aristizabal Gomez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

John Jairo Acosta Perez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **a881013fe168929bb61f048fe4a713c092cea16c395181bb632a300ffd922509**

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>